

**Constancia Secretarial:** Vencidos los términos de traslado dispuestos en la lista fijada el 7 de diciembre de 2021, los intervinientes remitieron en término los alegatos de conclusión al correo institucional, como se aprecia en la subcarpeta 06 inmersa en la carpeta de segunda instancia del expediente.

Pereira, 18 de enero de 2022.

**DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ**

Secretario

**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL**

**SALA DE DECISIÓN LABORAL**

**MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ**

**PEREIRA, DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS**

Acta de Sala de Discusión No 12 de 31 de enero de 2022

### **SENTENCIA ESCRITA**

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandante **JOSÉ RAÚL PALACIO PALACIO** en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 15 de julio de 2021, así como el grado jurisdiccional de consulta dispuesto a favor de la demandada **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES**, dentro del proceso cuya radicación corresponde al N°66001310500420200014301.

### **ANTECEDENTES**

Pretende el señor José Raúl Palacio Palacio que la justicia laboral condene a la Administradora Colombiana de Pensiones a reajustar la pensión de vejez que le fue reconocida en la resolución SUB205577 de 2 de agosto de 2018, aplicándole al ingreso base de liquidación reconocido por Colpensiones una tasa de

reemplazo del 90% conforme con lo establecido en el Acuerdo 049 de 1990. Subsidiariamente solicita que se condene a la entidad accionada a reliquidar la prestación económica, aplicando al IBL reconocido por Colpensiones una tasa de reemplazo del 85% de conformidad con lo previsto en la ley 100 de 1993. Subsidiariamente pide que se reajuste la mesada pensional reconocida por Colpensiones, aplicándole al IBL calculado por la entidad accionada una tasa de reemplazo del 80% de acuerdo con las reglas establecidas en la ley 797 de 2003. En cualquiera de los tres casos, solicita que se condene también a la Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 o en su defecto la indexación de las sumas reconocidas, lo que resulte probado extra y ultra petita, además de las costas procesales a su favor.

Refiere que: nació el 6 de julio de 1956; estuvo afiliado al régimen de prima media con prestación definida administrado inicialmente por el Instituto de Seguros Sociales y posteriormente por la Administradora Colombiana de Pensiones, entre el 1° de agosto de 1971 y el 31 de julio de 2018, acreditando un total de 2150 semanas de cotización, de las cuales 989 las realizó antes del 1° de abril de 1994. Antes del 29 de enero de 2003, fecha en que empezó a regir la ley 797 de 2003, tenía acumuladas 1436 semanas cotizadas y para el 29 de julio de 2005 acreditaba más de 1540 semanas de cotización al sistema general de pensiones.

El 10 de julio de 2018 radicó solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez, la cual fue reconocida por la entidad accionada por medio de la resolución SUB205577 de 2 de agosto de 2018; en ese acto administrativo la Administradora Colombiana de Pensiones determinó que el IBL era equivalente a la suma de \$3.039.813, aplicando posteriormente una tasa de reemplazo del

78.56%, motivo por el que ordenó cancelar a partir del 1° de agosto de 2018 una mesada del orden de \$2.380.221.

El 29 de julio de 2019 solicitó que se reajustara la mesada pensional, petición que fue negada en la resolución SUB226899 de 21 de agosto de 2019; el 3 de octubre de 2019 interpuso recurso de apelación, solicitando la reliquidación de la pensión de vejez, pero la misma fue negada en la resolución DPE12872 de 7 de noviembre de 2019.

Al contestar la demanda -archivo 17 carpeta primera instancia-, la Administradora Colombiana de Pensiones sostuvo que la pensión de vejez reconocida a favor del señor José Raúl Palacio Palacio se ajusta a derecho, debido a que la entidad aplicó correctamente al caso del accionante las disposiciones inmersas en el artículo 34 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 10 de la ley 797 de 2003, arrojando la mesada pensional reconocida en los actos administrativos relacionados anteriormente. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones elevadas por el actor y formuló las excepciones de mérito que denominó *“Inexistencia de la obligación”, “Prescripción”, “Imposibilidad jurídica para reconocer y pagar derechos por fuera del ordenamiento legal”, “Buena fe”, “Imposibilidad de condena en costas”, “Improcedencia de los intereses moratorios por el no pago de las mesadas pensionales”* y *“Declaratoria de otras excepciones”*.

En sentencia de 15 de julio de 2021, la funcionaria de primera instancia sostuvo que si bien el señor José Raúl Palacio Palacio era beneficiario del régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 hasta el 31 de diciembre de 2014, al tener acreditados más de 15 años de servicios para el 1° de abril de 1994 cuando empezó a regir el sistema general de pensiones, siendo aplicable en su caso el régimen pensional dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990, lo cierto es que él cumplió el lleno de los requisitos para acceder a la pensión de vejez más allá del 31 de diciembre de 2014, ya que los 60 años de edad exigidos

en la referida normatividad los cumplió el 6 de julio de 2016, razón por la que la prestación económica reconocida a su favor no se guía por las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990.

Bajo ese mismo panorama, al no haber cumplido el señor Palacio Palacio el lleno de los requisitos exigidos en la ley 100 de 1993 en su versión original antes de que entrara en vigor la ley 797 de 2003, tampoco es posible aplicar las disposiciones previstas en el artículo 34 de la ley 100 de 1993 en su versión original para definir la tasa de reemplazo a aplicar sobre el IBL obtenido por la Administradora Colombiana de Pensiones.

Conforme con lo expuesto, concluyó la *a quo* que la normatividad aplicable en el caso del demandante para definir el porcentaje de la tasa de reemplazo, es la contenida en el artículo 10 de la ley 797 de 2003 modificatoria del artículo 34 de la ley 100 de 1993; estableciendo, luego de aplicar las reglas allí contenidas, que el accionante tiene derecho a que se le aplique al IBL reconocido por Colpensiones una tasa de reemplazo del 80%, motivo por el que tiene derecho a disfrutar una mesada pensional equivalente a la suma de \$2.423.850 a partir del 1° de abril de 2018, motivo por el que ordenó a la entidad accionada modificar la resolución SUB205577 de 2 de agosto de 2018.

Posteriormente condenó a la Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar por concepto de diferencia pensional causada entre el 1° de agosto de 2018 y el 30 de junio de 2021, la suma de \$2.044.718; la cual no se ha visto afectada por el fenómeno de la prescripción.

De acuerdo con el cambio de postura de la Corte Suprema de Justicia frente a la causación de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993 en este tipo de casos, condenó a la entidad accionada a reconocer y

pagar sobre las diferencias pensionales generadas, los referidos intereses moratorios a partir del 29 de octubre de 2019 y hasta que se verifique el pago total de la obligación.

Autorizó a la Administradora Colombiana de Pensiones a descontar de la suma reconocida, el porcentaje correspondiente a los aportes al sistema general de salud.

Finalmente, condenó a Colpensiones en costas procesales en un 80% a favor del demandante.

Inconforme parcialmente con la decisión, el apoderado judicial de la parte actora interpuso recurso de apelación, manifestando que el señor José Raúl Palacio Palacio, como beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, tiene derecho a que se le aplique la tasa de reemplazo del 90% prevista en el Acuerdo 049 de 1990, pues realmente al entrar en vigor la ley 100 de 1993, él ya tenía un derecho adquirido al haber completado más de las 1000 semanas exigidas en ese cuerpo normativo, faltando únicamente el cumplimiento de la edad, sin que pueda restringirse su acreditación hasta antes del 31 de diciembre de 2014.

De no acogerse esta argumentación, pide que se aplique entonces la ley 100 de 1993 en su versión original a efectos de aplicar la tasa máxima de reemplazo del 85% establecida en su artículo 34, ya que el señor José Raúl Palacio Palacio tenía la densidad de semanas exigidas en ese cuerpo normativo, antes de que empezara a regir la ley 797 de 2003, faltando únicamente que transcurriera el tiempo hasta que cumpliera la edad mínima exigida en ese régimen pensional.

Al haber resultado afectados los intereses de la Administradora Colombiana de Pensiones, se dispuso también el grado jurisdiccional de consulta a su favor.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

Conforme se dejó plasmado en la constancia emitida por la Secretaría de la Corporación, las partes hicieron uso del derecho a presentar alegatos de conclusión dentro del término otorgado para tales efectos.

En cuanto al contenido de los alegatos de conclusión remitidos por el apoderado judicial de la parte actora, teniendo en cuenta que el artículo 279 del CGP dispone que *“No se podrá hacer transcripciones o reproducciones de actas, decisiones o conceptos que obren en el expediente.”*, baste decir, que los argumentos allí esgrimidos coinciden con los expuestos en la sustentación del recurso de apelación.

Por su parte, el apoderado judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones reitera la totalidad de los argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda, razón por la que sostiene que esa entidad aplicó correctamente la ley al reconocer en sede administrativa el monto de la pensión de vejez a favor del señor José Raúl Palacio Palacio, razones por las que solicita que se revoque en su integridad la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, para en su lugar negar la totalidad de las pretensiones de la acción.

Atendidas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los siguientes:

### **PROBLEMAS JURÍDICOS**

**1. ¿Acredita el señor José Raúl Palacio Palacio los requisitos exigidos en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 y en el Acto Legislativo 01 de 2005 para ser beneficiario del régimen de transición?**

**2. ¿Cuál era el régimen pensional anterior a la ley 100 de 1993 que le era aplicable al señor José Raúl Palacio Palacio?**

**3. ¿Consolidó el señor José Raúl Palacio Palacio el derecho a la pensión de vejez dentro del plazo otorgado en el régimen de transición?**

**4. ¿Adquirió el accionante el derecho a la pensión de vejez en vigencia de la ley 100 de 1993 en su versión original?**

**5. ¿Acreditó el señor José Raúl Palacio Palacio el derecho a la pensión de vejez en vigencia de la ley 797 de 2003?**

**En caso de que la respuesta al interrogante sea afirmativa**

**5.1 ¿Cómo es la forma en la que debe liquidarse el monto de la pensión de vejez según el artículo 34 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 10 de la ley 797 de 2003?**

**5.2. ¿Tiene derecho el demandante a que se reajuste la pensión de vejez reconocida por la Administradora Colombiana de Pensiones?**

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala considera necesario precisar, los siguientes aspectos:

## **1. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y ACTO LEGISLATIVO 001 DE 2005**

En orden a que nuevas disposiciones no vulneren **expectativas de derecho avanzadas**, que si bien aún no pueden considerarse como **verdaderos derechos adquiridos**, si merecen el mantenimiento de las condiciones previas que permitan su concreción, el artículo 36 de la ley 100 de 1993 estableció un régimen de transición, en virtud del cual, las personas que se encuentren en las especiales condiciones allí previstas, puedan adquirir su derecho pensional en la cuantía y según los requisitos previstos en la legislación anterior.

Son acreedores del beneficio del que se viene hablando quienes hubiesen cumplido 40 o 35 años al momento de entrar a regir la ley 100 de 1993, según se trate de hombres o mujeres, o quienes acrediten más de 15 años de servicios cotizados.

El Acto Legislativo 001 de 2005, por medio del cual se adicionó el artículo 48 de la Constitución Nacional, dispuso, en el párrafo transitorio 4º, como fecha límite para la concreción del derecho pensional en aplicación del régimen de transición el 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que, además de beneficiarse de dicho régimen, acrediten como mínimo 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia de dicha disposición, esto es, el 29 de julio de 2005, a los cuales se les respetará el régimen hasta el 31 de diciembre de 2014, fecha máxima en la que los afiliados beneficiarios del régimen de transición deberán consolidar el derecho pensional, acreditando la edad y la densidad de semanas exigidas en el régimen pensional anterior que les sea aplicable.

## **2. DERECHOS ADQUIRIDOS Y MERAS EXPECTATIVAS CON RELACIÓN AL ACTO LEGISLATIVO 001 DE 2005.**

En sentencia C-242 de 2009, la Corte Constitucional precisó que los derechos adquiridos son aquellas situaciones individuales y subjetivas que se crean y definen bajo el imperio de una ley, otorgándoles a esos individuos un derecho subjetivo que debe ser respetado frente a leyes posteriores que no pueden afectar lo legítimamente obtenido; **mientras que las meras expectativas son probabilidades de adquisición futura de un derecho que, por no haberse consolidado, pueden ser reguladas por el legislador**, con sujeción a parámetros de justicia y de equidad.

Bajo esa premisa y al analizar los cambios introducidos por el Legislador mediante el Acto Legislativo 001 de 2005, indicó:

*“Las reformas a los regímenes pensionales, en particular, garantizan la sostenibilidad financiera del sistema pensional y la financiabilidad de otros potenciales pensionados. Estas finalidades constitucionalmente relevantes obligan a la ponderación entre sacrificios individuales y beneficios al sistema (artículo 48 CP, adicionado por el Acto Legislativo No. 1 de 2005). Ello explica que esta Corte haya puesto de presente que el Legislador no está obligado a sostener en el tiempo las expectativas que tienen las personas, conforme a las Leyes vigentes, en un momento determinado. Su potestad de configuración legislativa le habilita a modificar los regímenes jurídicos en función de nuevas variables, razones de oportunidad o conveniencia, y a otros intereses y circunstancias contingentes que deba priorizar para lograr los fines del Estado Social de Derecho, desde luego, consultando parámetros de justicia y equidad, y con sujeción a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.”.*

De lo expuesto se concluye que, si el Congreso de la República en su función legislativa tiene la facultad de modificar los regímenes jurídicos con el fin de lograr los fines del Estado Social de Derecho, con mayor razón puede ejecutar esa función en calidad de constituyente derivado, como en efecto lo hizo al adicionar el artículo 48 de la C.P. mediante la expedición del Acto Legislativo 001 de 2005.

### **3. FIJACIÓN DEL MONTO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ EN VIGENCIA DE LA LEY 797 DE 2003.**

Establece el artículo 34 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 10 de la ley 797 de 2003 que:

*“El monto mensual de la pensión de vejez, correspondiente a las primeras 1.000 semanas de cotización, será equivalente al 65% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.000 hasta las 1.200 semanas, este porcentaje se incrementará en un 2%, llegando a este tiempo de cotización al 73% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.200 hasta las 1.400, este porcentaje se*

*incrementará en 3% en lugar del 2%, hasta completar un monto máximo del 85% del ingreso base de liquidación.*

*El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85% del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima de que trata el artículo siguiente.*

**A partir del 1o. de enero del año 2004 se aplicarán las siguientes reglas:**

*El monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas mínimas de cotización requeridas, será del equivalente al 65%, del ingreso base de liquidación de los afiliados. Dicho porcentaje se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:*

*$r = 65.50 - 0.50 s$ , donde:*

*r = porcentaje del ingreso de liquidación.*

*s = número de salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

*A partir del 2004, el monto mensual de la pensión de vejez será un porcentaje que oscilará entre el 65 y el 55% del ingreso base de liquidación de los afiliados, en forma decreciente en función de su nivel de ingresos calculado con base en la fórmula señalada. El 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 semanas. Adicionalmente, el 1o. de enero de 2006 se incrementarán en 25 semanas cada año **hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.***

*A partir del 2005, por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima.” (Negrillas y subrayas fuera de texto).*

## **EL CASO CONCRETO.**

Luego de elevar solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez, la Administradora Colombiana de Pensiones emitió la resolución SUB205577 de 2 de agosto de 2018 -págs.23 a 28 archivo 02 carpeta primera instancia- por medio de la cual decide reconocer a favor del señor José Raúl Palacio Palacio la gracia pensional a partir del 1° de agosto de 2018, después de verificar que el

actor cumplió con el lleno de los requisitos exigidos en el artículo 33 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9° de la ley 797 de 2003, fijando posteriormente un IBL equivalente a la suma de \$3.029.813, determinando a continuación, luego de aplicar la tasa de reemplazo del 78.56%, que el accionante tenía derecho a disfrutar una mesada pensional para el año 2018 igual a \$2.380.221; decisión que fue confirmada en las resoluciones SUB226899 de 21 de agosto de 2019 y DPE12872 de 7 de noviembre de 2019 - págs.46 a 53 y 68 a 76 archivo 02 carpeta primera instancia-.

Sin embargo, considera el actor que la pensión de vejez en su caso estaba regulada, bien bajo los presupuestos del Acuerdo 049 de 1990 en su calidad de beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 o en su defecto en los parámetros establecidos en la ley 100 de 1993 en su versión original.

En torno a la afirmación consistente en que el señor José Raúl Palacio Palacio es beneficiario del régimen de transición, sea pertinente indicar que a pesar de que el actor no tenía cumplidos los 40 años exigidos en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 a la fecha de entrada del sistema general de pensiones, pues como se ve en la copia de la cédula de ciudadanía -pág.29 archivo 02 carpeta primera instancia- él nació el 6 de julio de 1956, acreditando 37 años para el 1° de abril de 1994, lo cierto es que para esa calenda tenía cotizadas un total de 988,56 semanas, que corresponden a 19,22 años de servicios; motivo por el que el demandante es beneficiario del régimen de transición previsto en la norma en cita, el cual se extendió en su caso hasta el 31 de diciembre de 2014, al acreditar más de 750 semanas de cotización para el 29 de julio de 2005, fecha en que empezó a regir el Acto Legislativo 01 de 2005.

El régimen pensional anterior en el que se encontraba afiliado el señor Palacio Palacio era el previsto en el Acuerdo 049 de 1990, al haberse afiliado desde el 1° de agosto de 1971 al régimen de prima media con prestación definida administrado por el extinto ISS, realizando a partir de ese momento todas sus cotizaciones a dicho régimen pensional.

Conforme con lo expuesto, para que la tasa de reemplazo prevista en el párrafo 2° del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990 se le aplicara al IBL obtenido por la Administradora Colombiana de Pensiones en la resolución SUB205577 de 2 de agosto de 2018 -págs.23 a 28 archivo 02 carpeta primera instancia-, le correspondía al actor consolidar el derecho pensional dentro del plazo de duración del régimen de transición, que como ya se advirtió, en el caso del señor José Raúl Palacio Palacio se extendió hasta el 31 de diciembre de 2014; sin embargo, a pesar de que él acreditó más de las 1000 semanas exigidas en el referido Acuerdo 049 de 1990 en vigencia del régimen de transición, lo cierto es que no consolidó su derecho pensional al 31 de diciembre de 2014, pues para esa fecha no contaba con los 60 años de edad exigidos en ese régimen transicional, ya que al haber nacido el 6 de julio de 1956, tan solo tenía cumplidos 58 años; razón por la que, al no haberse consolidado el derecho a la pensión de vejez dentro de la vigencia del régimen de transición, el monto de la pensión no puede regirse por el Acuerdo 049 de 1990, como correctamente lo definió la *a quo*.

Idéntica situación acontece frente a la aplicación del artículo 34 de la ley 100 de 1993 en su versión original, pues para que el monto de la pensión de vejez del accionante se regulara bajo esos parámetros, le correspondía al demandante acreditar el lleno de los requisitos requeridos en el artículo 33 de la ley 100 de 1993 en su versión original hasta el 29 de enero de 2003, fecha en que entró a vigor la ley 797 de 2003, sin embargo, a pesar de que él contaba con la

densidad de semanas exigidas en esa normatividad, lo cierto es que para esa fecha no había arribado a los 60 años de edad, ya que tan solo tenía cumplidos 46 años.

Es por lo anterior que, para poder acceder a la pensión de vejez, la única opción que tenía el señor José Raúl Palacio Palacio, era consolidar el derecho bajo las reglas establecidas en el artículo 9° de la ley 797 de 2003 que modificó el artículo 33 de la ley 100 de 1993, el cual exige tener cotizadas un total de 1300 semanas para aquellos afiliados que cumplan la edad mínima de 62 años desde el 1° de enero de 2014; requisitos que cumple a cabalidad el actor, pues en toda su vida laboral acredita un total 2150 semanas cotizadas hasta el 31 de julio de 2018, como se ve en la historia laboral inmersa en la resolución SUB205577 de 2 de agosto de 2018 -págs.23 a 28 archivo 02 carpeta primera instancia- y los 62 años de edad los cumplió el 6 de julio de 2018; por lo que el monto de la mesada pensional se rige por las reglas del artículo 10 de la ley 797 de 2003 modificatorio del artículo 34 de la ley 100 de 1993; como atinadamente lo determinó la falladora de primer grado.

Así las cosas, procederá la Sala a definir cuál es el monto de la mesada pensional a que tiene derecho el actor, siendo pertinente tener en cuenta que el IBL obtenido por la Administradora Colombiana de Pensiones en la resolución SUB205577 de 2 de agosto de 2018 -págs.23 a 28 archivo 02 carpeta primera instancia- , y que no fue objeto de controversia por el demandante al iniciar la presente acción, es igual a la suma de \$3.029.813; valor que debe ser tenido en cuenta en la aplicación de la formula prevista en la norma en cita, tal y como se ve a continuación:

$$r = 65.50 - 0.50 s$$

r = porcentaje del ingreso de liquidación

s = número de salario mínimos legales mensuales.

Entonces

$$s = \$3.029.813 \text{ (IBL)} / \$781.242 \text{ (S.M.L.M.V 2018)}$$

$$s = 3,88$$

Por lo tanto

$$r = 65.50 - 0.50 (3,88)$$

$$r = 65.50 - 1,94$$

$$r = 63,56\%$$

Teniendo claro entonces que la tasa de reemplazo inicial del actor es del 63.56%, corresponde determinar hasta que porcentaje máximo alcanza a llegar con la adición del 1.5% a que tiene derecho por cada 50 semanas cotizadas sobre las 1300 mínimas exigidas, y como quiera que él cuenta con 2150 semanas, de las cuales 850, entonces resultan ser adicionales, que otorgarían un 25.5% más de porcentaje, para un total del 89.06%, pero como la norma señala una tasa máxima de reemplazo del 80%, es este el punto de partida para liquidar su pensión, según la norma "**en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo.**"

Por lo que, al aplicar nuevamente la fórmula, para ubicar al actor según su salario en el rango establecido por la norma (70.5 - 80.00), se tiene lo siguiente:

$$r = 80.50 - 0.50 (S)$$

$$S = \$3.029.813 \text{ (IBL)} / \$781.242 \text{ (S.M.L.M.V 2018)}$$

$$S = 3,88$$

$$r = 80.50 - 0.50 (3,88)$$

$$r = 80.50 - 1,94$$

$$r = 78,56\%$$

En consecuencia, siendo el IBL no discutido de un valor de \$3.029.813, al aplicarle la tasa de reemplazo que señala la disposición vigente, se tiene una mesada pensional inicial de \$2.380.221, que es precisamente el valor que fue reconocido por Colpensiones en la resolución inicial y en aquellas que resolvieron los recursos interpuestos, por lo que ningún reajuste corresponde ordenar.

Conforme con lo expuesto, se revocará en su integridad la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 15 de julio de 2021, para en su lugar negar la totalidad de las pretensiones incoadas por el señor José Raúl Palacio Palacio.

Costas en ambas instancias a cargo de la parte actora en un 100% a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones.

En mérito de lo expuesto, la **Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

## RESUELVE

**PRIMERO. REVOCAR** en su integridad la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 15 de julio de 2021, para en su lugar **NEGAR** la

totalidad de las pretensiones incoadas por el señor JOSÉ RAÚL PALACIO PALACIO.

**SEGUNDO. CONDENAR** en costas procesales en ambas instancias a la parte actora en un 100% a favor de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES.

Notifíquese por estado y a los correos electrónicos de los apoderados de las partes.

Quienes integran la Sala,

**JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ**  
Magistrado Ponente

**ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN**  
Magistrada  
Ausencia justificada

**GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO**  
Magistrado

Sin constancias ni firmas secretariales conforme artículo 9 del Decreto 806 de 2020

**Firmado Por:**

**Julio Cesar Salazar Muñoz  
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional  
Sala 2 Laboral  
Tribunal Superior De Pereira - Risaralda**

**German Dario Goez Vinasco  
Magistrado  
Sala 003 Laboral  
Tribunal Superior De Pereira - Risaralda**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**8c44c2015cc1d48ebe2d449aac52d38d10a33424756efbb636b532d683407038**

Documento generado en 02/02/2022 07:03:30 AM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente  
URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**